

El Gobierno prepara un cheque para cuatro millones de hogares

El plan anticrisis incluirá la rebaja del IVA de la luz y ayudas al transporte público, y se abre paso el recargo al beneficio extra de las energéticas

A. MAQUEDA / C. E. CUÉ, **Madrid**
Nueva ronda de estímulos ante la pérdida de poder adquisitivo por la elevada inflación y en el contexto de la victoria del PP en Andalucía. El Gobierno aprobará el sába-

do, en un Consejo de Ministros extraordinario convocado en vísperas de la cumbre de la OTAN, la renovación del plan anticrisis para combatir la inflación —que supera el 8%—, y que incluirá una

batería de medidas de nuevo cuño. El equipo económico del Ejecutivo prepara un cheque en torno a los 300 euros para cuatro millones de beneficiarios, sean individuos o familias, en función de

su nivel de renta. Habrá también ayudas al transporte público. Y los socios de coalición avanzan hacia un recargo a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas. **PÁGINAS 14 Y 15**



Pedro Sánchez y la vicepresidenta Nadia Calviño, ayer en el Congreso. / ANDREA COMAS

Sánchez prepara un cheque para hogares vulnerables ante la inflación

La ayuda, de unos 300 euros, alcanzará a unos cuatro millones de beneficiarios

ANTONIO MAQUEDA
CARLOS E. CUÉ. Madrid

El Gobierno discute varias medidas para aprobar el sábado un decreto contra la inflación más potente que el vigente, que acaba el 30 de junio. La medida estrella de esta nueva norma anticrisis será un cheque para compensar por la inflación a unos cuatro millones de beneficiarios, sobre los que está por definir si serán unidades familiares o personas. Según el INE, alrededor de cuatro millones de hogares ingresan por debajo de entre 12.000 y 14.000 euros de renta familiar al año. El objetivo es esa clase media-baja que está sufriendo el encarecimiento de la alimentación, pero que no está entre los que reciben prestaciones asistenciales y tampoco se beneficia de las ayudas fiscales al no hacer la declaración del IRPF.

La cuantía del cheque podría estar en torno a los 300 euros que ya había defendido Unidas Podemos, aunque la cifra final aún puede variar tras las negociaciones de los equipos económicos del Gobierno y de UP. Estas empezaron a última hora del martes y continuarán hoy y mañana. Si fueran al final los 300 euros por hogar, el coste de la medida supondría unos 1.200 millones de euros. Está aún por decidir si la tramitación será a través de Hacienda o de la Seguridad Social. UP prefiere que sea la primera, por su mayor eficacia, la que lo gestione.

Según fuentes gubernamentales, esta es una de las iniciativas que se incluirán en el paquete del

Más de 10.000 millones contra la crisis en lo que va de año

El Gobierno está elevando sustancialmente la factura de sus medidas para combatir las consecuencias de la inflación. Una vez apruebe el sábado la prórroga y a falta de que se concreten las nuevas iniciativas, el Ejecutivo habrá gastado en lo que va de año una cifra superior a los 10.000 millones de euros. Tan solo hay que hacer unas cuentas rápidas: el

coste de las rebajas en el impuesto de la luz ascenderá a unos 6.000 millones en nueve meses. Esto incluye la rebaja del IVA primero del 21% al 10% y, luego, del 10% al 5%; la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad al 0,5%, y la suspensión del impuesto sobre la producción.

Hay otros cerca de 3.000 millones, los que costarán seis

meses de descuento en los carburantes, a razón de 15 céntimos el Estado y 5 la petrolera, tanto para los profesionales como los particulares. Y todo ello podría subir todavía más si finalmente surten efecto las presiones de una parte del Gobierno para aumentar aún más la bonificación.

De salir adelante el cheque, supondría un solo pago de unos 1.200 millones si se aplica en los términos que está defendiendo Unidas Podemos: cuatro millones de hogares que ingresan en torno al salario mínimo y que cobrarían

próximo sábado, además de la bajada del IVA de la luz hasta el 5% que anunció ayer en el Congreso el presidente Pedro Sánchez, y otras cuestiones relevantes todavía en plena discusión.

La medida de los 300 euros fue una reclamación de UP ya en el anterior decreto, y ahora la ha reactivado. Entonces el sector socialista la descartó: argumentaban que España ya había ayudado a ese sector con el ingreso mínimo vital, que se amplió en el decreto. Sin embargo, ahora sí que está dispuesto a llevarla adelante. El motivo es que la crisis se agrava por la persistencia de la inflación, y porque se busca ampliar la ayuda a trabajadores con rentas bajas pero no tanto como para cobrar el ingreso mínimo vital.

La medida se toma después del varapalo político a la izquierda en las elecciones andaluzas, que ha llevado al Gobierno a pisar el acelerador y aumentar las ayudas ya para este verano. Otros países como Italia y Francia también han apostado por cheques a las rentas bajas para compensar la inflación. En Francia fueron 100 euros para los que ganan menos de 2.000 al mes —los salarios son más altos que los españoles—; en Italia, 200 euros para rentas inferiores a 35.000 euros anuales.

Más allá de la situación política tras las andaluzas, el diagnóstico del Gobierno sobre la economía es claro: la inflación está tomando una fuerza tal que es muy difícil atajarla aplicando cirugía en sectores como la energía, donde se ha aprobado un tope al gas que ya está logrando bajar el precio de la electricidad, aunque de forma todavía moderada. Un análisis detallado de las tripas del IPC arroja que cerca del 70% de la cesta de la compra lleva seis meses acelerando los precios. La mitad de la subida del IPC se corresponde ya con bienes y servicios no energéticos. Por eso no basta ya con medidas que hagan descender la inflación. Hace falta un paquete más contundente que ayude a las rentas de las familias.

Hay consenso en el Ejecutivo sobre estos y otros asuntos sobre la mesa, como la prórroga o el aumento de ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas. Se trata de unos mínimos sobre los que se están puliendo detalles de la atenta mirada de Hacienda, inquieta por el posible descontrol del déficit. En principio, se volverán a prorrogar los 20 céntimos de descuento para los combustibles, cuya subida en estos tres meses casi ha devorado la ayuda. UP quiere que se hagan diferencias en función de la

un pago de entorno los 300 euros.

Y además habría que sumar los casi 1.000 millones que se han destinado a ayudas específicamente sectoriales para la agricultura, la pesca y la industria electrointensiva. Algunas de estas partidas también podrían aumentar todavía más el próximo sábado ante la persistencia de la inflación alta. En total, la cifra supera los 10.000 millones sin contar otras iniciativas que puedan incluirse. O la prórroga de estas medidas hasta final de año.

renta, pero Hacienda lo descarta por su complejidad. El Ejecutivo también está cerrando otra medida de calado, que es una reducción del coste del abono de transporte. El Gobierno financiaría una parte de esta bajada y las comunidades y ayuntamientos otra, algo que puede traer problemas políticos. Además, se prorrogaría el límite del 2% a las actualizaciones de los alquileres.

La discusión de fondo entre los apoyos del Ejecutivo está en la subida de los impuestos a las eléctricas, que reclama buena parte de los aliados del Gobierno y promueve UP. La Moncloa admite que la situación de beneficios extraordinarios y reparto de dividendos récord mientras los ciudadanos sufren para pagar la luz, el gas y el combustible es insostenible políticamente. Sin embargo, Hacienda prefiere que este impuesto se aplique a partir de 2023, para evitar conflictos con Bruselas y posibles demandas judiciales. Querría ver el encaje jurídico y que su aprobación fuera en paralelo con los Presupuestos. Algunos países como Italia, Grecia o el Reino Unido ya han promovido impuestos extraordinarios a las energéticas. Unidas Podemos exige hacerlo ya, pero aún no hay acuerdo.

Bases imponibles

El sector socialista rechaza una subida del tipo en unos 10 puntos, como pide Podemos. Según fuentes gubernamentales, un incremento del tipo no conseguiría mucho porque hay mecanismos como las bases imponibles negativas que neutralizarían esta subida. En lugar de esto, el Ejecutivo está estudiando un recargo sobre el beneficio extraordinario similar al de Italia y el Reino Unido, donde calculan una media de periodos anteriores y ponen un gravamen sobre la diferencia. Por ejemplo, en Italia, donde el Gobierno de Mario Draghi empezó en un 10% de recargo y ahora ha anunciado que lo subirá al 25%, se calcula utilizando las liquidaciones del IVA y se aplica a eléctricas, gasistas y petroleras. Cuando la aprobó, Italia esperaba ingresar así unos 4.000 millones de euros. Una posibilidad para agilizar el cobro es que este recargo se introduzca a través de los pagos fraccionados con los que las empresas adelantan su contribución por sociedades.

El Gobierno tiene en marcha un conjunto de medidas para intentar abaratar la luz, con la rebaja de impuestos y el tope al gas. Aquí entraría el recorte adicional del IVA de la luz al 5% anunciado por Sánchez. El Gobierno ya lo había bajado el verano pasado desde el 21% al 10%. España sigue así la estela de Polonia, que también lo bajó al 5% sin pedir permiso a la UE. Esta era una de las principales reclamaciones del PP en el anterior decreto. De esta forma, con el paquete completo y algunas medidas más que se puedan incorporar estos días, el Ejecutivo pretende aliviar el bolsillo de los ciudadanos acosados por la inflación y cambiar la agenda política en una semana muy difícil. Es posible que sea el propio Sánchez quien comparezca el sábado para anunciar un paquete en el que todo el Ejecutivo está volcado.